SECUESTROS POLITICO-MILITARES

La captura de otros siete alcaldes -seis en Chalatenango en desafío a la capacidad militar del Cnel. Sigifredo Ochoa y uno en El Paisnal a pocos kilómetros de la capital- por parte del FMLN, junto con la marcha de protesta por la captura de los otros doce, realizada en San Miguel, más la prolongación del secuestro de la hija del presidente Duarte y de su compañera, centran la actualidad política de esta semana en el significado de estos secuestros. Su acumulación muestra que no se trata de hechos aislados sino de un planteamiento estratégico que conviene aclarar.

La idea general que hay tras todos estos secuestros es que el FMLN quiere mostrar cómo en El Salvador hay no sólo una guerra civil sino, consecuentemente, dos poderes, que se consideran competentes para ejercer, donde su fuerza militar se hace presente, el poder total del Estado. El gobierno captura a quienes estima que son parte del FMLN y el FMLN captura a quienes estima que son parte del gobierno. Para el FMLN no es sólo una cuestión de hecho -como no lo es para el gobierno- sino una cuestión de derecho. Sus radios lo dicen claramente: los lugares que no puedan ser defendidos y mantenidos por el poder militar del gobierno y que puedan ser atacados por el FMLN no deben ser considerados como lugares, en que pueda haber alcaldes representantes del régimen establecido en la parte gubernamental. Estos alcaldes no sólo estarían ejerciendo el poder local en territorio que el FMLN estima controlable por él sino que representan un poder con el que el FMLN está en guerra, poder al que ayudan de múltiples formas. Como la FA capturaría a alcaldes que el FMLN pudiera en lugares controlables por ella, así lo hace el FMLN en los que puede controlar. Esta es la lógica de las acciones del FMLN,

con la que se podrá discrepar, pero que subraya la gravedad no sólo del secuestro o captura de alcaldes sino de la situación del país.

Hay quienes piensan que el caso de los secuestros ha de enfocarse como un problema meramente humano o, desde el plano político, como una muestra de la desesperación del FMLN ante su impotencia militar. Así lo están queriendo hacer ver estos días distintas fuentes de propaganda. Que el problema tenga un aspecto humano, nadie lo niega, pero no se reduce a esa consideración; que implique una desesperación por parte del FMLN, parece más un deseo que una constatación. El que a la táctica iniciada por el ERP en la captura de los alcaldes se haya unido ahora el FPL de manera masiva, lo que indica es la unidad de propósito y de método, así como la ampliación de la estrategia político-militar. Los costos que esto les pueda suponer en la opinión pública son juzgados menores que los beneficios esperados en esta guerra, que se agrava por el retraso indefinido del diálogo y de la negociación.

Distinto carácter tiene el secuestro de la hija del presidente. Cada día aparece más claro que tras el Frente Pedro Pablo Castillo, responsable de la captura, está el FMLN. Lo que se pretende en este caso es simplemente un canje político-militar. El gobierno tiene en su poder, capturados por la FA, a importantes miembros de la guerrilla y ésta quiere recuperar cuanto antes a los más posibles, algunos de los cuales son armados, pero otros son predominantemente civiles. El FMLN parece haber medido de nuevo el alto costo de su acción, sobre todo en el plano político internacional, donde el grupo de Contadora y los cancilleres de Centroamérica -no excluido Miguel

D'Escoto- han condenado explícitamente el hecho. Pero aun así ha preferido llevar su proyecto adelante, exigiendo que en el interior del país se rebajase casi hasta cero la propaganda de las protestas nacionales e internacionales por el secuestro. Todo parece indicar que los captores ya se han puesto en contacto con el propio presidente a través de radios y teléfonos, de tal forma que ya se están dando pasos para la solución del problema. La contrapartida por la liberación de la hija del presidente no va a ser pequeña y habrá que ver cómo reacciona la FA. Con todo no ha de olvidarse que existe el precedente del hermano del ministro de Defensa, quien fue también secuestrado y canjeado por un importante hombre de la guerrilla, hace más de un año.

Se ha entrado así de lleno en la guerra de los secuestros, que cada una de las partes llama capturas, cuando son suyos quienes los realizan y son contrarios quienes los sufren. Lo que de menos malo hay en todo ello es que el problema se enfoca más como canje de prisioneros que como una acción terrorista. Al parecer no hay ultimatum en ninguno de los casos, ni malos tratos y, menos aún, peligro de asesinato. Pero este equilibrio inestable podría romperse, no sólo trayendo dificultades adicionales al diálogo, sino entrando en una espiral de violencia terrorista, que dificultaría cualquier forma de apertura democrática. Además, mientras no se resuelva el caso de la hija del presidente, la acción política del gobierno va a quedar trabada, porque este es un gobierno muy presidencialista y en la actual coyuntura el presidente está casi dedicado por completo al caso de su hija.

La guerra de los secuestros político-militares puede convertirse en otra faceta de la lucha, con lo cual ésta se comlica más y más.